

Parte I
Política y gobernabilidad



*Alberto Adrianzén M.
Eduardo Ballón E.
Marisa Glave R.
Nicolás Lynch G.
Maximiliano Ruiz R.*

¿El fin de un ciclo? Incertidumbre e imprevisibilidad

Eduardo Ballón E.

Sumilla

Nuestra historia, cada vez más marcada por la imprevisibilidad, vio cómo las elecciones del 2021 aumentaron el volumen de la sorpresa y de la perplejidad. El triunfo de Pedro Castillo no lo previeron ni sus promotores; la multiplicación de listas de la derecha y la suma de argumentos primitivos que enarbolaron, tampoco. Que su Gobierno fuera desde el primer momento uno de continuidad del patrimonialismo, el clientelismo y el pago de favores a los círculos inmediatos del mandatario, no era fácil de entender. No lo fue tampoco su suicidio político, imitando a Alberto Fujimori con su autogolpe. El gobierno de Dina Boluarte continuó con la misma ruta de precariedad e improvisación. Convertida en socia menor de la coalición autoritaria, no dudó en reprimir bárbaramente a quienes protestaron por lo que entendieron como una traición. 69 muertos/muertas después, insiste en la inocencia de su Gobierno, en la responsabilidad de otras personas de las muertes en las protestas, la presencia de terrucos, las balas *dum dum* y una conspiración internacional. Hoy se abraza sin problemas con quienes la enfrentaron diariamente en el pasado inmediato, guiada, como aquellos/aquellas, por su ambición de supervivencia.

En este escenario, en los últimos meses asistimos a un tipo de protestas que alcanzaron especial intensidad, con múltiples protagonistas y alta presión sobre el orden político y social imperantes, que amenguaron tras un pico, porque su unidad, que se expresó en su momento de mayor movilización, no identificaba necesariamente un sujeto colectivo. Antes que un proceso político de construcción de un orden nuevo, encontramos uno de ruptura del orden cotidiano como resultado de una historia larga que lo configura. El estallido fue imprevisible por su carácter rural, provinciano, campesino y comunero, recordándonos las movilizaciones por la tierra de los 50 y 60 del siglo pasado. Desde el inicio, este desborde mostró geografía e historia, territorios y rostros, en un escenario de fragmentación y ausencia de liderazgos fuertes, donde las comunidades campesinas e indígenas adquirieron protagonismo y devinieron en actores protagónicos. El estallido vivido nos pone frente a un movimiento democratizador distinto a los anteriores, por su origen y sus protagonistas, pero especialmente por su carácter político, lo que no quiere decir que estemos ya frente a un bloque de contestación.

NUESTRA HISTORIA, CADA VEZ MÁS MARCADA POR LA IMPREVISIBILIDAD, vio cómo las elecciones del 2021 aumentaron el volumen de la sorpresa y de la perplejidad. El triunfo de Pedro Castillo no lo previeron ni sus promotores; la multiplicación de listas de la derecha y la suma de argumentos primitivos que enarbolaron, tampoco. El discurso del vencedor contra el modelo económico y la campaña desatada por la derecha desde el inicio de la segunda vuelta electoral, hacían impensable que desde el primer momento aquel Gobierno fuera uno de continuidad en la visión patrimonial del poder, en el privilegio, en el pago de favores a los círculos inmediatos del mandatario y en la relación clientelar e instrumental con la gente, que caracterizan buena parte de nuestra vida republicana.

Un año atrás concluíamos un texto similar a este, constatando que la confluencia de distintas crisis que tenían ya un recorrido, el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo de Pedro Castillo y el Congreso de la República¹, así como la nula gestión del Gobierno

¹ Sobre el particular, ver: Barrenechea, Rodrigo y Encinas, Daniel. «Perú 2021: Democracia por defecto». *Revista de Ciencia Política*, vol. 42, n.º 2. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile - Instituto de Ciencia Política, 2022, pp. 408-438. En: [rb.gy/f493aq](https://doi.org/10.15138/rb.gy/f493aq)

Ver también: Dargent, Eduardo y Rousseau, Stephanie. «Perú 2020: ¿El quiebre de la continuidad?». *Revista de Ciencia Política*, vol. 41, n.º 2. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile - Instituto de Ciencia Política, 2021, pp. 378-400. En: [rb.gy/34qh1h](https://doi.org/10.15138/rb.gy/34qh1h)

del primero, incrementaron los malestares y las demandas fragmentadas de sectores mayoritarios de la sociedad, a la par que evidenciaron que el mandatario y Perú Libre, partido de su Gobierno, trocaron un discurso de compromiso con el cambio y la denuncia del orden existente, para terminar su primer año ahogados en una gestión marcada, desde el día uno, por el cuoteo pragmático de cargos y responsabilidades, como un Gobierno más de continuidad en la visión patrimonial del poder y en la relación clientelar e instrumental con la gente que han caracterizado buena parte de nuestra historia republicana².

Reducida la política a enfrentamientos de distinto tipo, con intentos constantes de vacancia presidencial y voces que amenazaban con el cierre del Congreso, hasta diciembre del año pasado seguíamos en lo mismo. En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, permanecían en su empeño de destruir al adversario, profundizando la polarización que vivimos, arrasando con lo poco que había avanzado el país en este siglo. Al otro lado, dos tercios de la ciudadanía desaprobaban al presidente, pero también al Congreso, que es su principal opositor. Es decir, en el sector político de representación no existió en ningún momento alguna figura y/o institución que simbolice cierto tipo de liderazgo. Ahora bien, más allá de discursos y provocaciones, era innegable que ni los unos ni los otros estaban dispuestos a irse; se necesitaban mutuamente en un escenario en el que la resistencia al adelanto electoral, que ya aparecía como salida al enfrentamiento en la opinión pública, desnudaba la precariedad y la debilidad de los principales actores políticos.

² Ballón, Eduardo. «Más me pegas, más te quiero...». En: desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. *Perú Hoy. Tiempos de incertidumbre*. Lima: desco, 2022. En: rb.gy/1zohnp

Los últimos meses de Pedro Castillo

La aprobación presidencial, pasado el efecto de la estrategia que aplicó con intensidad entre febrero y julio del 2022 (Consejos de Ministros Descentralizados³, viajes de campaña permanentes, ministras/ministros jugando a ser voceros defensores y reuniones varias con distintas organizaciones sociales, reales y de ocasión), logró mantenerse hasta noviembre por encima del 25%. Esta situación era unánime y se repetía en el medio urbano y rural, en las distintas macrozonas, así como en todos los niveles socioeconómicos, a excepción de Lima y el nivel A/B. La desaprobación del Congreso de la República, en noviembre de ese año, ya se ubicaba en un contundente 86%⁴. Ambos poderes del Estado hacían diariamente méritos para el malestar y la incertidumbre de la gente: el Ejecutivo persistía en nombramientos polémicos, daba declaraciones altisonantes vacías de contenido, hacía promesas sin destino y se mantenía en el escándalo recurrente de los varios entornos presidenciales; mientras que el Congreso amagaba con censuras que no contaban con los votos

³ En los consejos realizados entre el 7 de febrero y el 7 de julio del 2022 participaron 650 alcaldes/alcaldesas provinciales y distritales, 17 gobernadores/gobernadoras regionales, 16 ministros/ministras en promedio por reunión, dos viceministros/viceministras en promedio, 38 congresistas, 42 asesores/asesoras de aquellos, 62 funcionarios/funcionaras de los equipos técnicos y más de 500 y 600 de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales. Con ellos/ellas, estuvieron distintos dirigentes y dirigentas sociales de frentes de defensa, federaciones campesinas, federaciones de trabajadores/trabajadoras y de centros universitarios, cámaras de comercio, comunidades campesinas, etc., en número indeterminado pues solo se tiene registro de quienes intervinieron en los consejos. La primera de estas reuniones se realizó en Cusco el 2021. El 2022 se realizaron 18, en igual número de regiones del país, 15 de ellas entre mayo y julio. Sobre el particular, ver: Chessman Olaechea, Yuri. «Los mecanismos de articulación y coordinación intergubernamental de Políticas Nacionales y Territoriales en el Perú». *Revista Ius Et Veritas*, n.º 65. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Facultad de Derecho, 2022, pp. 24-40. En: rb.gy/qza3bj

⁴ Instituto de Estudios Peruanos (IEP). *IEP Informe de Opinión - Noviembre 2022*. Lima: IEP, 2022. Ver en: rb.gy/h5041w

necesarios, buscaba caminos leguleyos para disminuir el número de votos que se requieren para la vacancia y exhibía diariamente la prepotencia, el autoritarismo y la miseria intelectual de muchos de sus integrantes.

En septiembre, la opinión a favor de elecciones generales adelantadas de presidente y congresistas, como salida de la crisis, alcanzaba el 60%, apareciendo como opción mayoritaria en todo el país. 59% de las/los encuestados consideraba entonces que el presidente no terminaría su gobierno⁵. No obstante tales números, Castillo mantenía un núcleo duro de respaldo que no bajaba del 25%, aprovechando que la arbitrariedad y la torpeza del Legislativo eran definitivamente mayores que las propias.

En ese escenario, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, le pidió al Congreso invocar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para superar los impedimentos establecidos por el artículo 117 de la Constitución y así poder acusar a Castillo ante el Poder Judicial, evidenciando, definitivamente, su sintonía con la mayoría parlamentaria y descalificándose, no solo por tratarse de una funcionaria que intervino descaradamente en una investigación sobre su hermana, si no por su repetición del comportamiento leguleyo y abusivo de la representación nacional. El mandatario estaba indagado por múltiples razones que van desde el plagio de su tesis de maestría hasta su participación en distintas licitaciones fraudulentas que tienen a su esposa y a Yenifer Paredes, hermana menor de esta, en la mira del Ministerio Público. La compra de biodiésel en Petroperú, los ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales, la obra del puente Tarata y la mafia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como las circunstancias de la destitución de su ex ministro del Interior, Mariano González, completaban el rosario de investigaciones que sindicaban a Castillo como jefe de una banda criminal.

⁵ IEP. *IEP Informe de Opinión - Septiembre 2022*. Lima: IEP, 2022. Ver en: rb.gy/v5l3ye

Cada vez más asediado por el Congreso, el Ministerio Público y los medios de comunicación, el gobierno de Castillo continuó deteriorándose sin encontrar respuesta a su creciente fragilidad. En ese marco, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un esperpéntico informe que acusaba al mandatario de traición a la patria, avanzando así en un tercer intento de vacancia. Entonces, asediado las últimas 72 horas de su mandato por una ofensiva del Ministerio Público y de los medios de comunicación (quienes terminaron rompiendo algunos de sus anillos más cercanos de protección y presentando nuevas denuncias y descubrimientos, como la supuesta extorsión de una empresaria corrupta), el mandatario optó por su suicidio político a través de un inesperado y torpe intento de golpe de Estado, triste imitación del que diera Alberto Fujimori en 1992, evidenciando el deterioro total de la democracia en el país.

El Congreso y la cada vez más precaria institucionalidad de un sistema al borde del colapso (fiscalía, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial), se beneficiaron del regalo que les entregó Pedro Castillo, permitiéndoles instalar la narrativa de la resistencia y de la defensa de la democracia por quienes hasta ese momento se mostraban tanto o más torpes, limitados y corruptos, que el mandatario y su entorno. Los sectores más pragmáticos de la derecha, que venían impulsando una salida de Castillo al menor costo posible para ellos/ellas, encontraron en Dina Boluarte y su decisión de entrar al juego la puerta para avanzar. En la coyuntura, que no esperaba nadie, aprovecharon el golpe presidencial para empujar rápidamente la vacancia y asegurar su permanencia por la vía constitucional, dado que la vicepresidenta asume hasta el 2026 y ellas/ellos se quedan. El resultado del golpe fallido instaló legalmente en el gobierno a la ex ministra de Castillo.

Dina Boluarte y el gobierno que se instaló

Desde la instalación del Congreso actual, las derechas, que son mayoría, se dedicaron, como parte de su contribución a la degradación de la democracia, a insistir en la cantaleta del fraude electoral. Es más, la primera comisión investigadora que organizaron fue para encontrar pruebas de ello. Guiados pues por su ánimo de revancha, se abocaron a buscar las vías para vacar al ex presidente y arrinconarlo en nombre de su función de control político, «naturalizando» la vacancia presidencial con una mayoría calificada de votos, sin mayor expresión de causa. Fracasados sus dos primeros intentos, cuando se aprestaban al tercero, Castillo les entregó su cabeza.

En ese escenario, la presidenta Boluarte es su socia, definitivamente menor, pero socia desde el primer momento. El Congreso, al no sancionarla por su historietita del Club Apurímac⁶, estableció el acuerdo que ella asumió y Castillo «facilitó». De esta manera, el Ejecutivo y las fuerzas del orden funcionaron desde el primer momento como pararrayos del parlamento, que siguió avanzando en su agenda «restauradora», que apunta al control de todos los resortes institucionales del Estado, a mantenerse en el poder hasta el 2026 y a reelegirse, así como a continuar con sus varios negocios mafiosos. Con ellas/ellos, importantes sectores empresariales y los grandes medios de comunicación buscan asegurar un nuevo ciclo para el modelo neoliberal. El «toma y daca» fue desde temprano la marca de una relación pragmática e interesada.

La mayoría de las voces en la prensa y muchas/muchos de los analistas y opinólogos coincidieron desde el primer momento de

⁶ El 2022 fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente infringir el artículo 126 de la Constitución, donde se prohíbe que un ministro de Estado pueda ser miembro de una asociación privada ni hacer gestiones a su nombre. Este caso fue archivado.

este Gobierno en que se trataba de la «superación» del de Pedro Castillo, subrayando la supuesta importancia de un gabinete de tecnócratas, buscando disimular que en realidad se trataba de un grupo de burócratas de segunda fila que aceptaron, prácticamente desde el primer momento, servir a las necesidades políticas y de legitimación del «nuevo» Gobierno. Si existía alguna duda, la renuncia de las ministras y ministros Patricia Correa (Ministerio de Educación), Grecia Rojas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Eduardo García (Ministerio de Trabajo) y Jair Pérez (Ministerio de Cultura), así como el «premio» a Alberto Otárola, que pasó del Ministerio de Defensa a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras las primeras muertes⁷, ya no permitían dudas. Desde entonces, el rol de las/los ministros ha sido el de gestionar la crisis y tratar de «gerenciar» la precaria estabilidad del país.

Las historias particulares de muchas y muchos de los más altos funcionarios y el cuoteo político en el Ejecutivo, que le criticaron tanto a Castillo, continuaron. Desde el ex ministro de Educación, Óscar Becerra, vinculado a la segunda gestión aprista y al escándalo de la compra de computadoras en aquel gobierno; hasta el ministro de Justicia, Daniel Maurate (ahora en la cartera de Trabajo), destituido de la Superintendencia Nacional de Control

⁷ Los ministros y la ministra que renunciaron lo hicieron censurando la violencia desproporcionada utilizada por el Estado en las protestas iniciales en Andahuaylas y Ayacucho. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 48 civiles perdieron la vida en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Entre el 11 y el 21 de diciembre del 2022 hubo 22 personas muertas: 7 en Apurímac, 2 en Arequipa, 1 en La Libertad (Virú), 10 en Ayacucho y 3 en Junín (Pichanaqui). Entre el 9 de enero y el 9 de febrero del 2023, las/los muertos fueron 26: 21 en Puno, 1 en Arequipa, 1 en Cusco, 1 en Apurímac, 1 en La Libertad y 1 en Lima. 7 de las personas fallecidas eran menores de edad: 3 en Puno, 2 en Apurímac, 1 en Ayacucho y 1 en Pichanaqui. 1 policía murió en Juliaca y 6 efectivos del Ejército se ahogaron cruzando un río en Ilave. El uso desproporcionado de fuerza del que hizo gala el Estado, así como el empleo de armas de guerra y el uso de las mismas para matar en la mayoría de casos, está documentado por distintos informes internacionales, algunos de los cuales hablan incluso de ejecuciones extrajudiciales.

de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) el 2011 por adulterar documentos y mantener vínculos con «los cuellos blancos»; pasando por la eventual participación de la ministra de Cultura en más de una contratación irregular, dejan claro que, en el «renovado» Gobierno, continúan los hechos y enredos controvertidos. Así pues, los vínculos políticos de la señora Boluarte, de varios de ellos, no dejaban lugar a dudas.

En general, la gestión de los sectores fue tan mediocre y sin rumbo desde el primer momento, como la que tuviera el gobierno de Castillo. La Cancillería fue incapaz de enfrentar con alguna inteligencia el aislamiento internacional del país, severamente cuestionado por las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder que se produjeron a partir de diciembre pasado, constatados por misiones de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Más allá de los enfrentamientos con los gobiernos de países vecinos, los cuestionamientos de Estados Unidos y de la Unión Europea fueron parte de ese panorama. Su incapacidad para manejar la crisis migratoria con Chile, en mayo, y el patético papelón de Otárola en Brasil, ese mismo mes, son otros ejemplos.

La parálisis y la demagogia para gestionar los efectos del ciclón Yaku y del fenómeno de El Niño, indignaron y empezaron a generar nuevas protestas en el norte del país. El hundimiento de un tramo de la Panamericana Norte y la crisis producida por las obras viales del proyecto del megamuelle de Chancay, evidenciaron a un Gobierno que mira al techo y que se desentiende de la población y de sus problemas. El desborde del dengue fue el ejemplo más saltante de esta incapacidad. Que todo ello estuviera atravesado por un discurso justificatorio, compartido con toda la coalición gobernante, denunciando una conspiración del izquierdismo internacional en alianza con el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal, es apenas un adorno de mal gusto.

El estallido social y las protestas

En los últimos meses asistimos a un tipo de protestas que alcanzaron especial intensidad, con múltiples protagonistas y alta presión sobre el orden político y social imperantes, que amenguaron tras un pico, porque su unidad, que se expresó en su momento de mayor movilización, no identificaba necesariamente un sujeto colectivo. Entonces, antes que un proceso político de construcción de un orden nuevo, encontramos uno de ruptura del orden cotidiano como resultado de una historia larga que lo configura. Así pues, lejos de una estrategia compartida, el estallido social se caracterizó por la ausencia de objetivos homogéneos y por la falta de cálculos sobre recursos y oportunidades. En otras palabras, asistimos a una unidad de sentimientos y percepciones, antes que a una de intenciones⁸.

Asistimos, también, a la simultaneidad de tres tiempos que convergieron en la crisis. El inmediato fue el cotidiano, que encontró entre sus canales a la calle y al espacio público, que tiene como sello más visible la crisis de representación política y la ilegitimidad del gobierno Boluarte; 69 personas muertas, 1956 heridos/heridas y cientos de personas perseguidas y judicializadas por participar en las protestas que se sucedieron, son argumento suficiente. El segundo, es el del fracaso de un modelo de crecimiento que ofreció progreso por el dinamismo de la gran empresa y el «emprendedurismo», combinado con el desplome de un Estado colapsado y desbordado por una sociedad que sufrió cambios muy profundos las últimas décadas. El tercero es, finalmente, el de más larga duración, histórica y estructural, el del naufragio de las narrativas de la República y del Estado-Nación, con sus promesas de igualdad, alimentado por décadas de desigualdad, exclusión, discriminación, racismo y olvido del mundo rural, de

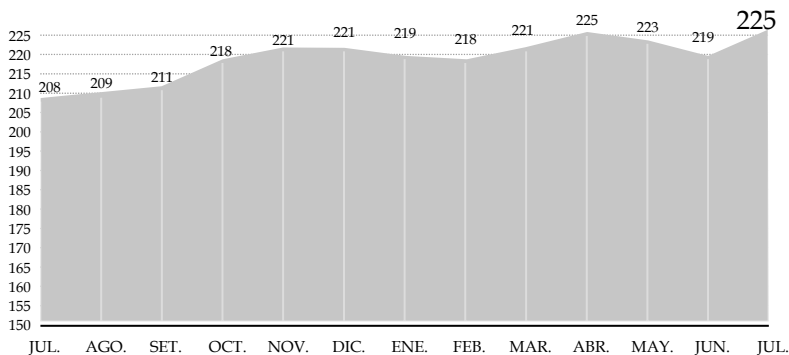
⁸ Smelser, Neil. *Teoría del comportamiento colectivo*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1989.

las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, que salieron masivamente a protestar reivindicando su identidad, sus derechos individuales y colectivos, su dignidad y su aspiración esencialmente política de ciudadanía. Atravesando estos tres tiempos, el innegable desencanto con la democracia.

Es así que, entre diciembre del 2022 y mayo del 2023, se produjeron 3369 acciones de protesta en un escenario de alta conflictividad que mostraba 218 conflictos por mes. Por primera vez en décadas, las protestas políticas fueron largamente mayores que las sociales. La demanda de una asamblea constituyente, más allá de si estamos en un momento constituyente o destituyente, aparecía como la demanda simbólica de un nuevo acuerdo social para darle sentido y legitimidad a una democracia que perdió el poco contenido que tuvo en algún momento. Tras el suicidio político de Pedro Castillo, el estallido evidenció su carácter rural, provinciano, campesino y comunero, recordándonos las movilizaciones campesinas por la tierra de los 50 y 70 del siglo pasado.

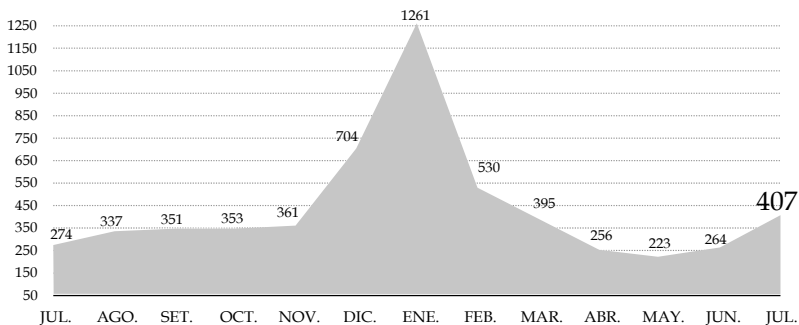
Gráfico n° 1

Perú: conflictos sociales registrados por mes, julio 2022-2023 (Número de casos)



Fuente: Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco) de la Defensoría del Pueblo.

Gráfico n° 2
Perú: acciones de protesta colectiva por mes, julio 2022-2023
(Número de acciones)



Fuente: Simco.

Con las primeras protestas se observaron los rasgos señalados, como parte de un proceso social que no fue estrictamente rural o campesino, pero en el cual dicha presencia era el sello fundamental que activó una dinámica de movilización local y provincial, sin ningún tipo de intermediación o «mensajero», como ya ocurrió antes en la historia⁹. Trasladarse a protestar a las principales ciudades fue desde el primer instante acercar a Lima la voz de quienes no la tienen. Llegar masivamente a la capital, como ocurrió en la segunda ola de movilización, fue la novedad. Eso lo saben bien las/los propios campesinos indígenas, residentes en comunidades y pequeños pueblos rurales, así como las/los migrantes que viven en las ciudades la experiencia de la discriminación frecuente.

⁹ Sobre el particular, ver: Rénique, José Luis. *La batalla por Puno: conflicto agrario y nación en los andes peruanos 1866-1995*. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) - IEP - Sur, Casa de Estudios del Socialismo, 2004. Ver también, del mismo autor: *La nación radical. De la utopía indigenista a la tragedia senderista*. Lima: La Siniestra Ensayos, 2022.

Desde diciembre, el desborde mostraba geografía e historia, territorios y rostros, siendo el sur andino donde se concentraron, desde entonces, las protestas más importantes. Es así que protestaron las siete regiones que generan más del 20% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, que concentran 43% de la actual inversión minera y que, simultáneamente, muestran algunas de las brechas sociales más altas del país. 68 distritos de esas regiones (14%) tienen más del 50% de sus habitantes en pobreza. Apurímac, Puno y Cusco se encuentran entre las más rurales de Perú, reuniendo a más del 38% de las comunidades campesinas. Históricamente, ese espacio fue centro de la rebeldía tupacamarista, detonante de los levantamientos caudillistas durante la República y escenario constante de las rebeliones indígenas contra los gamonales y la lucha por la tierra, estando siempre obligado a relacionarse con el Estado en medio del desprecio. Como los levantamientos de los siglos XIX y XX, el estallido vivido entre el 2022 y el 2023 muestra que ciudadanos/ciudadanas y comunidades indígenas aún se enfrentan contra los poderes y el orden establecidos que reproducen la injusticia, la discriminación y la marginación.

Ese Perú rural movilizado obligaba a mirar los cambios que van de la segunda mitad del siglo XX a la segunda década del XXI. Como lo precisa Carlos Monge en un trabajo en curso¹⁰, es un mundo urbanizado más rural de lo que la estadística dice, con importante diferenciación entre la pequeña propiedad y la producción familiar campesina, totalmente integradas al mercado, y con plantaciones agroexportadoras orientadas al mercado externo; de una pobreza extendida y profunda, con procesos de acumulación de capital y diferenciación interna; de un tejido social e institucional que se afirma y se reinventa después de la reforma

¹⁰ Monge, Carlos (con la colaboración de José María Guerra García). *El Perú rural. Democratización y mercantilización territorializadas, diferenciadas, desiguales y discriminatorias*. Documento borrador de investigación en curso.

agraria y el conflicto armado interno, en un marco de inserción al mercado y crecimiento, pero también de rediseño de la presencia del Estado a través de la descentralización.

En ese contexto de grandes inversiones privadas, de deprecación ambiental y homogenización cultural, pero también de afirmación de las identidades propias, asistimos a una creciente conflictividad, a la vez de una intensa participación política y a un importante empoderamiento de las poblaciones rurales en los espacios políticos locales, regionales y nacionales. Estos cambios no niegan, por cierto, una herencia colonial y republicana que atraviesa las relaciones económicas, sociales, culturales, políticas y de poder en el Perú contemporáneo, y más específicamente las relaciones en la sociedad rural y entre esta y el país, manteniéndose innegablemente formas de colonialidad en las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales y étnicos¹¹.

Las tres olas de la protesta tuvieron rasgos propios. La primera, que fue autoconvocada, tuvo un acento identitario y de defensa del sentido de un voto. Muy dinámica en el Sur, inicialmente desde las provincias y localidades, y no desde las regiones, las movilizaciones se generalizaron en algunos departamentos del país. Se trataba de organizaciones territoriales locales, significativamente rurales y campesinas e indígenas, acompañadas por asociaciones barriales y juntas de regantes, apoyadas discursivamente por algunas articulaciones más nacionales como la Central Única de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú. En el caso mayoritario de las comunidades campesinas movilizadas, la remoción de Castillo y su prisión eran identificadas como un «agravio». Las matanzas en Apurímac y Ayacucho sumaron pronto a otros sectores, varios de ellos críticos de Castillo, que se pronunciaban contra la represión, demandando el adelanto de elecciones.

¹¹ Quijano, Aníbal. *Vivir adentro y contra. Colonialidad y descolonialidad del poder*. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2022.

La segunda ola estuvo marcada por la masacre de Juliaca y la «toma de Lima». La intervención de San Marcos y las movilizaciones que se sucedieron en distintas regiones sumaron nuevos apoyos, mientras miles de manifestantes de provincias, especialmente del Sur, llegaron a la capital y se movilizaron durante semanas. Las y los marchantes del interior, ante la precariedad de las coordinaciones con los distintos gremios y sindicatos presuntamente «nacionales» e instalados en Lima, recibieron el apoyo de sus paisanos/paisanas y familiares residentes que les abrieron viviendas y locales comunales en sus barrios, aunque no marcharon con ellas/ellos. Como resultado de esta ola se afirmaron como mayoritarias las demandas por la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la consulta constituyente.

La tercera ola se dio luego de cuatro meses en los que las movilizaciones casi desaparecieron. Distintas plataformas anunciaron una nueva jornada, «la tercera toma de Lima», para el 19 de julio. En este proceso participaron diversas organizaciones y personas, a pesar de que no hubo articulación social plena, ni una agenda común compartida. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron protestas en 64 provincias, concentraciones en 59 y en 23 bloqueos de vías.

Sin embargo, más allá de su innegable importancia y su altísimo costo, las movilizaciones y las protestas no esconden la gran fragmentación de nuestra sociedad y la dificultad para articular intereses, que se derivan de la misma. En la heterogeneidad de participantes en las tres olas no fue clara la formación de una mayoría, ni la articulación de una plataforma con capacidad de agencia. La distancia y desconfianza entre organizaciones nacionales como la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) y las/los actores territoriales, locales y regionales, a pesar de los esfuerzos de las partes, se mantienen desde el primer momento. No existen organizaciones y movimientos sociales

capaces de agregarse, como ocurría en los 70; tampoco partidos ni políticos con liderazgo para sumar intereses y dirigir, como ocurrió en la Marcha de los Cuatro Suyos¹². La dificultad para articular los espacios de coordinación territorial, donde, en distintos momentos, unos han desconocido a otros, debilita a todos y todas

Es en este escenario de fragmentación y ausencia de liderazgos fuertes que las comunidades campesinas e indígenas adquirieron protagonismo y devinieron en actores fundamentales de las protestas. Ubicadas en un contexto rural que se transformó en los últimos 40 años, las decisiones que se toman en el ámbito comunal no responden ya solo a asuntos locales. La urbanización e inserción de la población comunero/campesina/indígena en el mercado, la violencia durante el conflicto armado interno, los procesos de concentración de la tierra y la mayor presencia del Estado han redefinido las formas y las lógicas de la organización social en el mundo rural, incluyendo los espacios urbanos de nivel distrital y provincial, cada vez más copados por la presencia permanente o itinerante de poblaciones rurales. Así pues, la configuración de la política comunal ha cambiado, lo que no niega que se haya mantenido y reinventado como la organización social básica de la población rural de estos territorios. En la participación del mundo rural en las protestas, hay que recalcarlo, las mujeres tuvieron un rol importante.

Lo que viene

Nuestra crisis de cohesión social es indiscutible¹³. A lo largo del siglo XX, contamos con una matriz básica que mal que bien

¹² Coronel, Omar. «Ni revolución ni barbarie: ¿por qué protestan en Perú?». *Nueva Sociedad*, n.º 304. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert (FES), 2023, pp. 4-13- Ver en: rb.gy/ewpbu4

¹³ Ballón, Eduardo. «El discurso de Dina, el malestar social y la larga falta de cohesión social». *comunesrevista.com*, Lima, 4 de agosto del 2023. Ver en: rb.gy/abohb8

permitió algunas formas de integración social segmentadas y un determinado orden. El fracaso del modelo económico y del Estado desarrollista que sustentaron ese patrón, la posterior generalización de las políticas de ajuste económico y estabilización promovidas desde las multilaterales, la consiguiente privatización del Estado y la desregulación de los mercados como receta para entrar a la globalización, liquidaron ese patrón. El modelo neoliberal que se impuso fue incapaz de producir una matriz nueva, alentando, por el contrario, un enorme individualismo y generando una gran incertidumbre porque el mercado como único ordenador social no genera integración. Largos años después de la transición democrática y del ciclo de crecimiento económico, constatamos el desplome del Estado y vivimos los costos de la informalidad. Observamos, una vez más, la incapacidad de la clase política, descubriendo cómo en una sociedad marcada por la pérdida de sus formas sociales y de la cohesión básica, las/los individuos enfrentan, en las distintas relaciones que tienen –formales, informales o ilegales–, juegos constantes entre grandes desigualdades de poder, sin encontrar en el corto plazo ni fuerza política ni capacidad de agencia en la sociedad para establecer un curso compartido¹⁴.

El estallido social vivido nos pone frente a un movimiento democratizador distinto a los anteriores por su origen fundamentalmente rural, por el protagonismo de las comunidades indígenas y campesinas, por su contenido identitario, y, especialmente, por su carácter político. Como hemos señalado, aunque estamos lejos de un bloque de contestación, es innegable que tras sus demandas lo que se exige en el tiempo es un nuevo contrato social, porque lo que está en crisis es el régimen de 1992, que ha sobrevivido en medio de algunas reestructuraciones internas, sin transformarse en la transición democrática.

¹⁴ Martuccelli, Danilo. *La sociedad desformal. El Perú y sus encrucijadas*. Sao Paulo: Edições Plataforma Democrática, 2021. Ver en: rb.gy/g2rvvg3

Las demandas y sentimientos que se agrupan en el estallido social son política y socialmente heterogéneas. Con las/los iniciadores de las protestas confluyeron comunidades rurales que vivieron cambios profundos las últimas décadas, capitales comerciales de circuitos locales y regionales, trabajadores precarios los más y sindicalizados los menos, así como clases medias, una parte de las antiguas y otra de las nuevas que se perciben más vulnerables, lo que queda de viejos movimientos sociales y lo que emerge de nuevos activismos. Puede ser una convergencia significativa aunque sigue marcada por las distancias y las desconfianzas que se acumularon también en el proceso mayor de transformaciones vividas por el país, marcadas por una modernización desigual y una modernidad pobre. Es una diversidad, pero puede ser también una dispersión. Frente a ellos/ellas y sus demandas, aparece una derecha, entendida antes como una visión del mundo que, con la suma y crecimiento de partidos de esa orientación, cada vez más primaria y autoritaria, busca una contrarrevolución cultural instalada en un tradicionalismo decimonónico para defender los sistemas de desigualdad y exclusión sobre los que se estructura la jerarquización social que buscan perpetuar, así como el orden económico neoliberal que defienden.

Hay muchos indicios de que entramos a un nuevo momento de nuestra historia, abriéndose una coyuntura larga que seguramente tendrá tantas alzas como bajas en materia de movilización y agenda. Si del estallido vivido resulta un movimiento y este quiere tener éxito, está obligado a construirse como pueblo y a expresarse en una coalición político social más amplia y menos desconfiada entre sus partes, que hoy no existe. Necesita construir puentes entre las demandas institucionales y de inclusión, con aquellas otras de derechos e igualdad. Para que ese horizonte posible tenga futuro, frenar a la coalición autoritaria y restauradora en el corto plazo es imprescindible.